



Asamblea General

Distr. general
26 de noviembre de 2012
Español
Original: francés

**Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 64º período de sesiones
(27 a 31 de agosto de 2012)**

Nº 40/2012 (Marruecos)

Comunicación dirigida al Gobierno el 28 de febrero de 2012

Relativa a Mohamed Hajib

El Gobierno respondió a la comunicación el 11 de abril de 2012

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue especificado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/16/47, anexo), el Grupo de Trabajo remitió la comunicación antedicha al Gobierno.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, y lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los derechos humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. El Sr. Mohamed Hajib (en adelante, el Sr. Hajib), de doble nacionalidad alemana y marroquí, tiene un título de economía por la Universidad de Duisburg y era empresario en Alemania cuando ocurrieron los hechos.

4. Al parecer, el Sr. Hajib fue detenido en julio de 2009 en el Pakistán cuando participaba en actividades religiosas organizadas por la Jamaat Al Tabligh (o Tablighi Jamaat), un organización religiosa que lleva a cabo actividades en numerosos países. Un mes después de su llegada al Pakistán, el Sr. Hajib decidió interrumpir su viaje para regresar a Marruecos.

5. Según se informa, cuando se dirigía al Irán hubo un control policial en el autobús en el que viajaba. Después de examinar sus documentos de identidad, las fuerzas del orden pakistaníes lo obligaron a descender y lo metieron por la fuerza en un vehículo. El Sr. Hajib fue encarcelado, y cinco días después fue trasladado con otros detenidos a Quetta, donde estuvo seis meses preso.

6. Según la fuente, pese a no ser inculpado, el Sr. Hajib estuvo encarcelado durante seis meses en unas condiciones particularmente difíciles. En ese contexto, el 3 de febrero de 2010 se declaró en huelga de hambre para protestar contra sus condiciones de detención. Al parecer fue puesto en libertad unos días después sin haber sido juzgado: un alto funcionario de la policía del Pakistán le dijo que no había ningún cargo en su contra sin explicarle las razones de su detención y encarcelamiento. El 17 de febrero de 2010, el Sr. Hajib voló a Francfort (Alemania).

7. Según las informaciones recibidas, el Sr. Hajib fue recibido en el aeropuerto de Francfort por dos policías a quienes se había avisado de la "llegada de un hombre peligroso". El Sr. Hajib les comunicó su intención de viajar inmediatamente a Marruecos, donde su familia lo esperaba.

8. Al bajar del avión en Casablanca, cinco hombres esperaban al Sr. Hajib, que fue inmediatamente esposado y trasladado por la fuerza a la comisaría de El Maarif, donde al parecer sufrió torturas. No se informó a su familia de su detención hasta cuatro días más tarde, cuando la policía judicial contactó a sus padres para explicarles que se encontraba en la comisaría de El Maarif.

9. Según se informa, el Sr. Hajib estuvo 12 días retenido en la comisaría de El Maarif antes de ser llevado ante el juez de instrucción del tribunal de Salé acusado de pertenencia a un grupo terrorista y a una asociación con fines delictivos.

10. Según las informaciones recibidas, cuando compareció en el tribunal de Salé, el Sr. Hajib declaró ante el juez de instrucción que había sufrido torturas en la comisaría de Maarif para obligarlo a firmar un documento que no se correspondía con sus declaraciones. La fuente sostiene que el juez no tomó en consideración sus declaraciones.

11. La fuente señala que, pese a la falta de pruebas, el Sr. Hajib ingresó en la cárcel de Salé en prisión preventiva.

12. Para protestar contra esas actuaciones judiciales, el Sr. Hajib volvió a declararse en huelga de hambre el 10 de mayo de 2010. El 24 de junio de 2010, después de 46 días de huelga, fue llevado ante un tribunal. Se informa de que el Sr. Hajib fue condenado en un juicio sumario a una pena de diez años de prisión por haber combatido en el Afganistán contra los ejércitos de los Estados Unidos y del Pakistán. La fuente afirma que los jueces simplemente se remitieron a los atestados de la policía sin tener en cuenta las declaraciones del Sr. Hajib ante el juez de instrucción y ante el tribunal. Según la fuente, la acusación no aportó ninguna prueba material y no se investigaron las denuncias de tortura.

13. Según la fuente, tras un movimiento de protesta en la cárcel de Salé, el Sr. Hajib fue trasladado en mayo de 2011 a la cárcel de Toulal, donde permaneció 15 días recluido en secreto. El consulado de Alemania logró averiguar su paradero e informó de su suerte a su familia.

14. Tras el traslado, al parecer el Sr. Hajib sufrió torturas y lo amenazaron con violarlo. Quince días después de su regreso a la cárcel de Salé, el Sr. Hajib intentó suicidarse y fue trasladado de urgencia al hospital. Según la familia, actualmente sigue sufriendo malos tratos en la cárcel de Salé.

15. La fuente considera que la privación de libertad del Sr. Hajib es arbitraria y contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el Pacto) en el que Marruecos es parte.

16. Según la fuente, la actual reclusión del Sr. Mohamed Hajib es contraria al artículo 9, párrafo 1, del Pacto, que establece que "todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales", que "nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias" y que "nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta". El párrafo 2 de ese mismo artículo dispone que "toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella". Según las informaciones recibidas, el Sr. Hajib no recibió en ningún momento dicha notificación cuando fue detenido en el aeropuerto de Casablanca ni fue trasladado ante una autoridad judicial dentro de un plazo razonable para que le notificaran la acusación.

17. La fuente sostiene además que la privación de libertad del Sr. Hajib también es contraria al artículo 14, párrafo 1, del Pacto, que garantiza el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella. El Sr. Hajib no pudo hacer valer sus medios de defensa, ya que, desde el inicio de la vista, los jueces se negaron a tomar en consideración sus declaraciones de que había sido torturado en la comisaría de policía de Maarif.

18. Asimismo, la fuente sostiene que la privación de libertad del Sr. Hajib es consecuencia del ejercicio de su derecho a expresar sus convicciones religiosas y, por tanto, vulnera el artículo 18, párrafo 1, del Pacto, que dispone que "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza".

Llamamiento urgente en relación con el caso del Sr. Hajib

19. El 30 de agosto de 2011, el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo hicieron un llamamiento urgente al Gobierno del Reino de Marruecos en relación con el caso del Sr. Hajib. El Grupo de Trabajo da las gracias al Gobierno de Marruecos por su respuesta al llamamiento urgente, de fecha 3 de octubre de 2011.

20. En su respuesta, el Gobierno de Marruecos indicó que el Sr. Hajib había sido detenido por la policía en estricto cumplimiento de la ley y bajo el control efectivo de la fiscalía por "pertenencia a una asociación con fines delictivos constituida con objeto de preparar y perpetrar actos terroristas para alterar gravemente el orden público mediante la intimidación, la violencia y el terror; pertenencia a un movimiento religioso no reconocido; y falsificación y uso de documentos falsificados". El Gobierno aclaró que la investigación y las vistas que habían tenido lugar en relación con el asunto se habían desarrollado respetando estrictamente los derechos del Sr. Hajib. Asimismo, negó todas las denuncias de malos tratos corporales y torturas contra el Sr. Hajib, que al parecer había sido sometido a un examen médico que había demostrado la ausencia de toda violencia.

Respuesta del Gobierno

21. En una carta de 11 de abril de 2012, el Gobierno de Marruecos informó al Grupo de Trabajo de que el Sr. Hajib había sido detenido por la policía en el aeropuerto Mohammed V de Casablanca y trasladado posteriormente al departamento de investigación criminal, donde se le había interrogado acerca de su relación con unos actos terroristas. En el interrogatorio preliminar admitió que defendía la ideología salafista yihadista y que había alentado a otras personas a que compraran armas para cometer actos terroristas.

22. El Gobierno de Marruecos señala que el 1º de marzo de 2010 el Sr. Hajib compareció ante el fiscal y posteriormente ante el juez de instrucción. Este último lo interrogó en presencia de su abogado, el Sr. Mohamed Al-Sabbar, del colegio de abogados de Rabat. El Sr. Hajib afirmó que, cuando viajaba al Afganistán o a cualquier otro país, su único objetivo era propagar la palabra de Dios. Dijo que no tenía relación con ninguna organización yihadista y que no tenía la intención de realizar ningún acto yihadista en Marruecos. Así, rechazó las acusaciones formuladas en su contra.

23. El Gobierno indica asimismo que, al finalizar la vista, el juez de instrucción decidió procesar al Sr. Hajib alegando su intención de formar una asociación con objeto de planificar y cometer actos terroristas en el marco de un movimiento yihadista destinado a alterar gravemente el orden público. El Sr. Hajib también fue acusado (en virtud de los artículos 218-1 9), 218-4 y 218-7 de la Ley antiterrorista N° 03-03) de recabar fondos para cometer un acto terrorista. El juez de instrucción dio traslado de la causa al tribunal penal de primera instancia que, después de estudiar el atestado de la policía y las declaraciones del acusado ante el juez de instrucción, resolvió que el acusado había cometido los actos de los que se le acusaba y lo condenó a una pena de diez años de prisión tomando en consideración circunstancias atenuantes. La causa se remitió a la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones, que confirmó la decisión por entender que estaba bien fundamentada jurídicamente.

24. Según la respuesta del Gobierno, la Fiscalía General y el abogado defensor recurrieron la decisión del tribunal penal. El Tribunal de Casación anuló la sentencia y devolvió la causa al Tribunal de Apelaciones. Se abrió un expediente de apelación con el N° 39/11/82, y el 9 de enero de 2012 el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del tribunal penal, pero redujo la pena a cinco años de prisión. El Sr. Hajib cumple condena en

la cárcel de Salé 2 por la comisión de actos terroristas (artículos 218-1 9) y 218-4 de la Ley antiterrorista N° 03-03).

25. Así pues, según la respuesta del Gobierno, el Sr. Hajib tuvo todas las garantías de un juicio justo y equitativo en el que se respetaron plenamente los derechos y libertades de la defensa.

26. En lo que respecta a las condiciones de reclusión, el Gobierno señala que, debido a los daños causados en la cárcel de Salé los días 16 y 17 de mayo de 2011, el Comisionado General del Departamento de Administración Penitenciaria y Reinserción trasladó al Sr. Hajib, con otros presos que habían cometido actos de vandalismo, a la cárcel del distrito de Meknès, cuyas condiciones cumplen las normas jurídicas aplicables. El 21 de mayo de 2012, el Sr. Hajib fue trasladado a la cárcel de Salé, cercana al Tribunal de Apelaciones de Rabat, donde debía comparecer. En la cárcel de Salé el Sr. Hajib goza de todos los derechos que le reconoce la ley como recluso y recibe periódicamente la visita de sus familiares y su abogado.

27. A este respecto, el Gobierno recuerda que, de conformidad con el artículo 55 de la Ley N° 23-98, que regula el funcionamiento de las prisiones, el Sr. Hajib ha sido objeto de medidas disciplinarias (45 días en una celda de aislamiento) por los motines y los actos de vandalismo ocurridos en la cárcel de Salé los días 16 y 17 de mayo de 2011.

28. El Gobierno indica que actualmente el Sr. Hajib cumple condena en las condiciones previstas por la ley. No ha sufrido en ningún momento actos de violencia ni torturas. Tampoco ha intentado suicidarse, por lo que no ha sido trasladado al hospital para ser atendido.

Comentarios de la fuente

29. La fuente sostiene en sus observaciones de 21 de agosto de 2012 que la condena del Sr. Hajib se basó únicamente en una confesión obtenida mediante torturas.

30. Según la fuente, de la respuesta del Gobierno de Marruecos se desprende que el Sr. Hajib, después de ser detenido por la policía en el aeropuerto Mohamed V de Casablanca, admitió durante la investigación preliminar haberse visto influenciado por la ideología salafista yihadista y haber movilizado a otras personas para destinar fondos a la adquisición de armas a fin de cometer un acto terrorista. También se desprende de esta misma respuesta del Gobierno que el Sr. Hajib, en su primera comparecencia ante el juez de instrucción en presencia de su abogado, negó haber tenido la intención de viajar al Afganistán o a ningún otro país para afiliarse a una organización yihadista, ni de cometer actos terroristas en Marruecos.

31. Asimismo, ha quedado demostrado que la acusación no ha presentado en ninguna fase de la investigación ninguna prueba material que confirme los hechos que se le imputan a la víctima. La respuesta del Gobierno confirma que no obra en el expediente ninguna otra prueba que permita confirmar los hechos que se imputan al Sr. Hajib.

32. Según la fuente, la respuesta del Gobierno confirma que la condena del Sr. Hajib se basó exclusivamente en el atestado que levantó la policía sobre los 12 días que permaneció bajo su custodia, durante los cuales, aislado del mundo exterior, fue víctima de torturas físicas y psicológicas cuyas secuelas sufre aún. De la respuesta del Gobierno también se desprende que al Sr. Hajib le reprocharon sus convicciones y creencias religiosas. Efectivamente, tanto durante la investigación preliminar como a lo largo de la instrucción y las distintas etapas del proceso, le interrogaron principalmente sobre sus creencias y convicciones religiosas y sobre su pertenencia al movimiento Tabligh, que no ha negado nunca.

33. La fuente recuerda que este movimiento de proselitismo religioso está reconocido en el Pakistán y no ha sido jamás clasificado como organización terrorista por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, parece que las autoridades marroquíes confunden al movimiento Tabligh con Al-Qaida o los talibanes, lo que podría haber motivado la detención del Sr. Hajib.

34. Según la fuente, la respuesta del Gobierno confirma así que el Sr. Hajib fue detenido por pertenecer al movimiento Tabligh e interrogado principalmente acerca de sus convicciones religiosas, y que su condena se basó en una confesión obtenida mediante torturas. Su privación de libertad es claramente arbitraria y se inscribe en las categorías III y V de las categorías de detención arbitraria a que se refiere el Grupo de Trabajo al examinar los casos sometidos a su consideración.

35. La fuente hace también referencia a una carta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, de 7 de julio de 2011, en la que se confirma que los servicios de asistencia consular de la Embajada de Alemania en Rabat hicieron un llamamiento a las autoridades marroquíes para que respetaran las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que prohíben los malos tratos físicos, y aseguraran el acceso a atención médica y asistencia jurídica. El Sr. Hajib denunció haber sufrido malos tratos en una entrevista con el personal consular alemán, lo que corrobora las alegaciones formuladas en el presente caso por la fuente ante el Grupo de Trabajo.

Deliberaciones

36. El Grupo de Trabajo observa que, según la respuesta del Gobierno, la condena del Sr. Hajib se basó en una confesión realizada en una vista preliminar, en la que admitió haber propagado la ideología yihadista salafista y haber alentado a otras personas a comprar armas para cometer actos terroristas. El Sr. Hajib confesó después de su detención en el aeropuerto de Casablanca, mientras permanecía bajo custodia policial, sin haber tenido acceso a un abogado y sin que hubiera ninguna prueba material.

37. Cuando compareció más tarde ante un juez de instrucción, asistido por un abogado, el Sr. Hajib negó todas las acusaciones formuladas en su contra y se retractó de su confesión, afirmando que había sido obtenida mediante tortura.

38. El Gobierno niega que se haya cometido ningún acto de tortura. No obstante, en los informes elaborados por el personal consular alemán tras sus entrevistas con el Sr. Hajib se señalan denuncias de tortura.

39. El Grupo de Trabajo recuerda las observaciones finales formuladas por el Comité contra la Tortura tras el examen de Marruecos en 2011, en las que el Comité expresa su preocupación porque "el sistema de instrucción penal actualmente en vigor en el Estado parte admita la confesión como forma sumamente corriente de prueba a los efectos del procesamiento y la condena de una persona. Le preocupa constatar que la confesión sirve de base de numerosas condenas penales, incluso en casos de terrorismo, lo que crea condiciones que pueden favorecer la utilización de la tortura y de los malos tratos contra el sospechoso (arts. 2 y 15)"¹.

40. El Comité señaló que el Estado parte debía:

"[...] tomar todas las medidas necesarias para que las condenas penales se pronuncien sobre la base de pruebas distintas de las confesiones del inculcado, en particular en los casos en que este se retracta de sus confesiones durante el juicio, y para que las declaraciones que se hayan hecho bajo tortura no puedan invocarse como elemento de prueba en el curso del

¹ CAT/C/MAR/CO/4, párr. 17.

procedimiento, excepto contra personas acusadas de tortura, conforme a lo dispuesto en la Convención."²

41. En particular, el Comité invitó al Estado parte:

"[...] a que examina[ra] las condenas penales pronunciadas exclusivamente sobre la base de confesiones, a fin de determinar los casos en que la condena se funda[ra] en confesiones obtenidas mediante tortura o malos tratos. Asimismo, se le invit[ó] a que tom[ara] todas las medidas correctivas apropiadas y a que inform[ara] al Comité de sus conclusiones."³

42. El presente caso se refiere a una persona que ha sido detenida, acusada, juzgada y condenada sobre la base de una confesión obtenida bajo tortura. No tuvo acceso a un abogado durante su interrogatorio, y en cuanto recibió asesoramiento jurídico se retractó de su confesión. Su condena se basó exclusivamente en sus declaraciones.

43. Las garantías de un juicio justo y equitativo previstas en el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíben la autoinculpación y prevén el derecho a la asistencia y la representación jurídicas y otras medidas de protección para evitar la obtención de pruebas mediante confesión. El artículo 14, párrafo 3 g), del Pacto dispone que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable. En su jurisprudencia, el Comité de Derechos Humanos ha declarado que esta disposición "ha de interpretarse en el sentido de que las autoridades investigadoras no ejercerán coerción física o psicológica directa o indirecta alguna sobre el acusado a fin de hacerle confesar su culpabilidad"⁴. En la comunicación N° 1769/2008, *Bondar c. Uzbekistán*⁵, el Comité constató la infracción del artículo 14, párrafo 3 b) y d), porque la víctima no tuvo acceso a un abogado durante su interrogatorio y porque se le negó su derecho a ser asistida por un abogado de su elección⁶. El Comité concluyó además que también se había vulnerado el artículo 14, párrafo 3 g), por la obtención de una confesión mediante tortura⁷.

44. El Grupo de Trabajo recuerda que, en su Observación general N° 32 (2007), el Comité de Derechos Humanos destacó que:

"[...] el apartado g) del párrafo 3 del artículo 14 garantiza el derecho a no verse obligado a declarar contra uno mismo ni a confesarse culpable. Esta salvaguardia debe interpretarse en el sentido de que no debe ejercerse presión física o psicológica directa o indirecta alguna sobre los acusados por parte de las autoridades investigadoras con miras a que se confiesen culpables. Con mayor razón es inaceptable tratar a un acusado de forma contraria al artículo 7 del Pacto a fin de obligarlo a confesar. El derecho interno debe establecer que las pruebas y las declaraciones o confesiones obtenidas por métodos que contravengan el artículo 7 del Pacto quedarán excluidas de las pruebas, salvo que se utilicen para demostrar que hubo tortura u otros tratos prohibidos por esta disposición, y que en tales casos recaerá sobre el Estado la carga de demostrar que las declaraciones de los acusados han sido hechas libremente y por su propia voluntad" (*no se reproducen las notas de pie de página*) (párr. 41).

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Comité de Derechos Humanos, comunicación N° 1033/2001, *Singarasa c. Sri Lanka*, párr. 7.4; véanse también las comunicaciones N° 253/1987, *Kelly c. Jamaica*, párr. 5.5; N° 330/1988, *Berry c. Jamaica*, párr. 11.7; N° 912/2000, *Deolall c. Guyana*, párr. 5.1.

⁵ Véase también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular los casos *Tibi c. el Ecuador*, serie C, N° 114, 7 de septiembre de 2004, párr. 146; *Maritza Urrutia c. Guatemala*, serie C, N° 103, 27 noviembre 2003, párr. 93; *Cantoral-Benavides c. el Perú*, serie C, N° 69, 18 de agosto de 2000, párr. 104.

⁶ Véase Comité de Derechos Humanos, comunicación N° 1769/2008, *Bondar c. Uzbekistán*, párr. 7.4.

⁷ *Ibid.*, párr. 7.6.

45. El Grupo de Trabajo toma nota de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia en la causa *Cuestiones relativas a la Obligación de Procesar o Extraditar (Bélgica c. el Senegal)*. En el párrafo 99 de su fallo, publicado el 20 de julio de 2012, la Corte señala lo siguiente:

"La prohibición de la tortura forma parte del derecho internacional consuetudinario y ha adquirido el carácter de norma imperativa (*jus cogens*).

Esta prohibición se basa en una práctica internacional generalizada y en la *opinio juris* de los Estados. Figura en numerosos instrumentos internacionales de aplicación universal (en particular en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; las Convenciones de Ginebra para la Protección de las Víctimas de la Guerra de 1949; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; y la resolución 3452/30 de la Asamblea General sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 9 de diciembre de 1975), y ha sido incorporada al derecho interno de casi todos los Estados; por último, los actos de tortura se denuncian regularmente en los foros nacionales e internacionales."⁸

46. Del mismo modo, el Grupo de Trabajo suscribe las preocupaciones y recomendaciones del Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Grupo de Trabajo se refiere al artículo 2 de la Convención contra la Tortura y recuerda el razonamiento de la Corte Internacional de Justicia en la causa relativa a la *Aplicación de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio (Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro)*, según el cual el contenido de la obligación de prevenir varía de un instrumento a otro, según la formulación de las disposiciones pertinentes y en función de la propia naturaleza de los actos que se han de prevenir⁹. En este sentido, el Comité contra la Tortura ha destacado que "la obligación de impedir los actos de tortura, estipulada en el artículo 2, tiene gran alcance"¹⁰, aclarando al mismo tiempo que su contenido no es estático porque las medidas más eficaces para prevenir la tortura "están en continua evolución" (párr. 4) y no son únicamente "las medidas previstas en los artículos 3 a 16" (párr. 1). Esta obligación de prevenir se aplica a todas las partes contratantes, en particular cuando evalúen el riesgo de que una persona sufra tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en un tercer país.

47. Por último, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes comparte la siguiente opinión:

"Los interrogatorios deberían celebrarse únicamente en centros oficiales y debería estipularse por ley la eliminación de lugares secretos de detención. El mantenimiento de una persona en un lugar de detención secreto o que no sea oficial llevado a cabo por un funcionario debería castigarse como delito. Los tribunales no deberían admitir las pruebas obtenidas en un lugar de detención que no sea oficial y que no sean confirmadas por el detenido durante un interrogatorio en locales oficiales. Las confesiones realizadas por personas privadas de libertad que no tengan lugar en presencia de un juez o de un abogado

⁸ Corte Internacional de Justicia, *Cuestiones relativas a la Obligación de Procesar o Extraditar (Bélgica c. el Senegal)*, fondo, fallo de 20 de julio de 2012, párr. 99.

⁹ Corte Internacional de Justicia, *Aplicación de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio (Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro)*, fondo, fallo de 26 de febrero de 2007, párr. 429.

¹⁰ Comité contra la Tortura, Observación general N° 2 (2008) sobre la aplicación del artículo 2 por los Estados partes, párr. 3.

no deberían tener valor probatorio en un tribunal, salvo como prueba contra los acusados de haber obtenido la confesión con medios ilícitos."¹¹

48. Uno de los objetivos de las disposiciones previstas en el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es ofrecer garantías contra toda forma de presión directa o indirecta, física o psicológica de las autoridades sobre el acusado para obtener su confesión. El derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable y a acceder a asistencia o asesoramiento jurídicos no son únicamente medidas destinadas a asegurar la protección de los intereses de la persona, sino que también redundan en interés de toda la sociedad, en la seguridad y eficacia del proceso judicial y en la fiabilidad de la prueba. La confesión realizada sin asesoramiento jurídico no puede admitirse como prueba en un proceso penal. Esto se aplica sobre todo a las confesiones realizadas durante el período de detención policial.

49. En el presente caso, el Sr. Hajib confesó en el marco de una investigación y no dispuso de un abogado ni de asistencia jurídica, lo que vulnera el artículo 11 de la Declaración y el artículo 14 del Pacto.

50. Por último, el Grupo de Trabajo observa que las denuncias de tortura se confirman en los informes del personal consular alemán. En su respuesta al Grupo de Trabajo, el Gobierno de Marruecos se limita a negar la obtención de la confesión bajo tortura sin demostrar que se ha llevado a cabo una investigación independiente y transparente de dichas denuncias. Por otra parte, durante el proceso no se presentó ninguna prueba material y la confesión se obtuvo sin la presencia de un abogado. Así pues, el Grupo de Trabajo concluye que se han vulnerado el artículo 5 de la Declaración y el artículo 7 del Pacto, leídos conjuntamente con los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración y los artículos 9 y 14 del Pacto. El Grupo de Trabajo considera que la vulneración del derecho a un proceso justo y equitativo de la que ha sido víctima el Sr. Hajib es de tal gravedad que hace que su detención sea arbitraria. En conclusión, la privación de libertad del Sr. Hajib se inscribe en la categoría III de las categorías de detención arbitraria a que se refiere el Grupo de Trabajo al examinar los casos sometidos a su consideración.

Decisión

51. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Mohamed Hajib es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 5, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 7, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su privación de libertad se inscribe en la categoría III de las categorías de detención arbitraria a que se refiere el Grupo de Trabajo al examinar los casos sometidos a su consideración.

52. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de Marruecos que proceda a la puesta en libertad inmediata del Sr. Hajib y le ofrezca una reparación adecuada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 5, del Pacto.

53. El Grupo de Trabajo decide remitir las denuncias de tortura al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

[Aprobada el 31 de agosto de 2012.]

¹¹ E/CN.4/2003/68, párr. 26 e).